

Santiago veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, duodécimo, décimo quinto a vigésimo tercero, y vigésimo sexto a vigésimo noveno que se eliminan.

Y teniendo además y en su lugar presente:

PRIMERO: Que no existe controversia y de hecho expresamente se reconoce por la demandada al señalar: “la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional”, que los hechos de que fue víctima, Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, de 17 años al momento de ocurrida su muerte, formaron parte de la acción de agentes del estado en los días y meses posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos graves, masivas y sistemáticas, siendo esta víctima una dentro de una política general de, persecución de un grupo de numeroso de personas, integrado por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales, y todo aquél que desde el 11 de septiembre de 1973, fue imputado de pertenecer o ser ideológicamente afín al régimen político depuesto o considerado sospechoso de oponerse o entorpecer el proyecto del gobierno militar. Política que en general da cuenta que las víctimas fueron objeto de un tratamiento inhumano, alejado de todo debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; sin la más elemental piedad por el semejante, configurándose, por tanto, una violación múltiple y continuada de numerosos derechos, que ha sido calificada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos como “una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad”, crímenes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar, pues tales hechos merecen una reprobación categórica de la conciencia universal, al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular. Que, entonces el delito del cual fue objeto el hermano de los demandantes debe ser calificado como un delito de lesa humanidad.



SEGUNDO: Que tratándose el delito del cual fue víctima el hermano de los demandantes un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resultaría coherente que la acción civil indemnizatoria ejercida en autos esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna. En efecto la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Incluso el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N° 19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

TERCERO: Que reiteradamente se ha resuelto que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. A ello obliga el Derecho Internacional, comprendido en los Convenios y Tratados que, por disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues, de hacerlo, comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado. De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que



emanan de la naturaleza humana”. El artículo 6° de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las “Bases de la Institucionalidad” -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las disposiciones legales que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6° enseña que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”, y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Así entonces, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno, previstas en el Código Civil, sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada.

CUARTO: Que reiteradamente se ha sostenido también en esta materia, que el Estado está sujeto a la regla de la responsabilidad, la que no son extrañas a nuestra legislación, pues el artículo 3° del Reglamento de La Haya de 1907 señala que “La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército”. Complementa lo anterior el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto señala que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo”, el que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto, encontramos



también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que “Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”. En síntesis, la obligación de reparación pesa sobre el Estado cuyos agentes han violado los derechos humanos de sus ciudadanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene señalando.

En suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a los familiares de la víctima consagrada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. Es más el deber al respecto por parte del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, se sostiene el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común y que, uno de los principios a que debe sujetar su acción, es el de responsabilidad y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado, autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado.

QUINTO: Que finalmente cabe tener presente que, la reiterada jurisprudencia, la Excelentísima Corte Suprema de nuestra República, que ha sostenido que, tratándose de un delito de lesa humanidad, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción



civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos e incluso por el propio derecho interno que, en virtud de las Leyes N° 19.123 y 19.992, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió beneficios de carácter económico o pecuniario, como forma de reparación. Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones, emanadas de los mismos hechos ilícitos y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Resulta importante traer a colación, al efecto, que el proceso de codificación en el país es temporalmente anterior a los sucesos que motivaron el surgimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya sea a través de tratados internacionales, resoluciones y demás fuentes internacionales, de modo tal que, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente. Ello, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, en particular, un renovado sistema de protección de los derechos que cuenta con postulados diversos y, a veces, en pugna con los del derecho privado, regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse. Esta rama emergente, representativa de la supremacía de la finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, plasmada en la orientación del Derecho Internacional hacia la defensa de los derechos humanos y el castigo de sus transgresiones por agentes del Estado, mediante la comisión de ilícitos de lesa humanidad, ha de primar por sobre la preceptiva anterior, surgida en un contexto que desconocía tal línea evolutiva. (SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015).

SEXTO: Que en consecuencia independiente del orden en que fue deducida, cabe señalar primeramente que, se rechazará la excepción de prescripción de la acción, promovida por la parte demandada

SEPTIMO: Que en cuanto a la excepción de improcedencia de la indemnización demandada por preterición legal de las demandantes, cabe



señalar que es un hecho de la causa que nos encontramos ante delitos calificado como de Lesa Humanidad y que, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, acción que no se encuentra condicionada a la ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas que han establecido diversos mecanismos de operación a los círculos más cercanos de una víctima de violación de derechos Humanos. En consecuencia, el derecho de los familiares de las víctimas de este tipo de ilícitos, como de los hermanos de la misma encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Así las cosas nada impide la demanda deducida por los hermanos de la víctima de autos, por lo que cabe rechazar la alegada improcedencia de la indemnización por preterición

OCTAVO: Que en cuanto la demandada alega que las acciones deducidas por doña Eva Helia, don Juan Manuel, doña Graciela de las Mercedes y don Carlos Alberto todos de apellido Lemus Muñoz, se basan en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorios ya enunciadas al contestar la demanda y sobre la cual basa la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados en cuanto al daño sufrido por la detención y posterior ejecución de su hermano Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios, cabe señalar que la Ley 19.992, de modo alguno establece la incompatibilidad que se pretende, por el contrario se trata de formas distintas de reparación, y que las asumidas por el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación señalada, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia, como prescribe el artículo 4 de la citada ley, que consagra expresamente que sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2° de la ley, la



pensión otorgada por aquella será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, serán, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

En consecuencia cabe desechar la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados en cuanto al daño sufrido por la detención y posterior ejecución de su hermano Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como se ha señalado precedentemente de pago opuestas por la demandada.

NOVENO: Que, quedó establecido que en causa Rol 30-2009 E sustanciada ante la Ministra en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. Marianela Cifuentes Alarcón, en fallo de fecha 26 de octubre de 2018, relativa al Homicidio Calificado de Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, y no fue controvertido en autos, lo siguiente:

“1° Que el día 2 de octubre de 1973, en horas de la noche, en circunstancias que Exequiel Alejandro Lemus Muñoz, de 17 años, se encontraba encerrado, sin derecho, en dependencias de la Subcomisaria de La Granja, fue sacado del lugar por una patrulla de carabineros de dotación de la referida unidad policial, integrada, entre otros, por el Sargento 2° Armando Sáez Pérez y el Carabinero Segundo Baldomero Llanos Amariles. 2° Que, acto seguido, Exequiel Lemus Muñoz, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, fue trasladado en una camioneta marca Chevrolet, modelo C -10, de color blanco, conducida por Segundo Baldomero Llanos Amariles, hasta calle Latinoamérica, entre Sebastopol y La Castrina, en la comuna de La Granja, lugar en que parte de la patrulla disparó en su contra, causándole la muerte. 3° Que, en esa época, la Subcomisaria de Carabineros de La Granja se encontraba a cargo del Capitán Héctor Fernando Osses Yáñez y del Teniente Aquiles Bustamante Oliva. 4° Que, asimismo, entre los días 2 y 3 de octubre de 1973, Luis Antonio Portuguez Maulén, de 17 años, recibió el impacto de un proyectil balístico disparado por un tercero, que le provocó un lesión tóraco cervical, anemia aguda y la muerte, siendo su cadáver encontrado el día 3 de octubre de 1973,



a las 08:00 horas, en una vía pública de la ciudad de Santiago, por personal de dotación de la Tenencia de Carabineros Vicuña Mackenna.”

DECIMO: Que el daño moral consiste en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, los padecimientos infringidos por el evento dañoso. El daño moral se considera una modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaría sin la ocurrencia del hecho dañoso que le impacta anímica o espiritualmente.

UNDECIMO: Que de los dichos de testigos Silvia Contreras Candia, Eliana del Carmen Pilquiñir Colina y Luis Vidal Abarzúa, ya analizada en el fallo en alzada, es posible advertir el sufrimiento psicológico que padecieron los demandantes, no solo por la muerte de su hermano, sino por las especiales circunstancias en que aquella ocurrió, suficiente para ser considerada como un daño moral que corresponde indemnizar

Dicho lo anterior estos sentenciadores harán lugar a las demandas, fijando la indemnización por daño moral en la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones) para cada uno de los demandantes

DECIMO SEGUNDO: Que la suma a pagar a título de indemnización, se reajustará conforme al alza del índice de precios al consumidor entre la fecha de esta sentencia y la de su pago efectivo; en caso de incurrir en mora, dicha suma debidamente reajustada devengará además el interés máximo para operaciones reajustables entre la fecha de la mora y su pago efectivo

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 del Código de Procedimiento Civil; artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; y artículos 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil se declara:

Que **se revoca** la sentencia apelada de veintidós de Octubre de dos mil diecinueve, complementada por resolución de treinta de junio de dos mil veinte, y en su lugar se resuelve:



I.- Que se rechazan las excepciones deducidas por la demandada.

II.- Que se hace lugar a la demanda y se condena al Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, a pagar a título de indemnización por daño moral a JUAN MANUEL LEMUS MUÑOZ, la suma de \$ 50.000.000; a GRACIELA DE LAS MERCEDES LEMUS MUÑOZ, la suma de \$ 50.000.000 y, a CARLOS ALBERTO LEMUS MUÑOZ, la suma de \$50.000.000.

III.- Que las sumas a pagar a título de indemnización, se reajustaran conforme al alza del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y la de su pago efectivo. En caso de incurrirse en mora las sumas así reajustadas devengarán el interés máximo para operaciones reajustables entre la fecha en que se incurra en mora y la de su pago efectivo.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Jorge Benítez Urrutia, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en todas sus partes en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Hernán Crisosto Greisse.

Rol 15.107-2019



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Antonio Ulloa M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

